

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE EL PAQUETE

La reactivación mostrada por el movimiento laboral durante 1985, se ha visto reforzada e impulsada con la implementación, por parte del gobierno, del programa de estabilización y reactivación económica, conocido popularmente como "paquete económico."

Tras un primer momento de silencio, dedicado al análisis interno del paquete —silencio erróneamente interpretado por el gobierno como una aceptación tácita del mismo—, las principales organizaciones sindicales y gremiales del país no sólo han rechazado públicamente las medidas, sino que también han logrado crear nuevas instancias organizativas, mediante las cuales están defendiendo sus intereses, objetivamente afectados por el "paquete."

En conferencia de prensa realizada el 5 de febrero, dirigentes de la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES), de la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA), y de la Unidad Popular Democrática (UPD), anunciaron la formación de la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), a la cual se han incorporado posteriormente el Comité Primero de Mayo y la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS).

Si el número de trabajadores representados en la UNTS es ya un dato impresionante (más de un millón de trabajadores), no lo es menos su formación misma. A la par de organizaciones tradicionalmente críticas al gobierno como el Comité Primero de Mayo, se encuentran organiza-

ciones consideradas hasta hace poco como "pro-gubernamentales", tal es el caso de la Unidad Popular Democrática, y hasta cierto punto también de COACES y AGEMHA. Este hecho muestra, sin duda, un grado nuevo de madurez y desarrollo del movimiento laboral y representa un saldo cualitativo en su lucha por la defensa de sus intereses.

La primera medida encaminada a hacer frente al "paquete económico" fue la celebración de la "Asamblea nacional por la supervivencia de los trabajadores" organizada por la UNTS el 8 de febrero. La asamblea definió las líneas de acción necesarias para afrontar y superar la actual crisis en beneficio de las mayorías populares. Producto de esta asamblea, en la cual estuvieron presentes 1.500 delegados de las distintas organizaciones gremiales y sindicales, fue la aprobación de una propuesta de 11 puntos dirigida al gobierno. La propuesta contiene demandas de tipo económico y de tipo político, entre las cuales están la derogación de aquellas medidas del paquete que afectan los intereses de las clases populares, la ejecución de la fase II de la reforma agraria, la continuación del diálogo interrumpido por el gobierno como única forma de alcanzar la paz, el efectivo respeto de los derechos humanos, la exoneración de la deuda agraria a las cooperativas y otras demandas de tipo reivindicativo. Asimismo, se acordó la realización de una "Marcha por la supervivencia de los trabajadores" el 21 de febrero con el propósito de protestar contra el "paquete," y de exigir el cumplimiento, por parte del gobierno, de la propuesta.

Pese a que los trabajadores públicos y del sector privado no pudieron asistir a la marcha por encontrarse laborando, la cantidad de personas reunidas (más de 60.000) la convirtieron en la mayor concentración popular habida en los últimos 5 años. A esto hay que agregar el hecho de que en ella estuvieron presentes más de 150 organizaciones gremiales y sindicales, representando a más de un millón de trabajadores. Entre las organizaciones se encontraban el Comité Primero de Mayo, el cual aglutina a unos 75 sindicatos y cuenta con alrededor de 250.000 miembros; la Unidad Popular Democrática (UPD), hasta hace poco tiempo una de las principales bases de apoyo del gobierno; la Central de Trabajadores Salvadoreños la cual aglutina a más de 40.000 servidores del sector público; la Asociación Sindical Independiente de El Salvador (ASIES), compuesta por más de 7 sindicatos; el numeroso sector cooperativo con sus más de 450.000 asociados; así como sectores estudiantiles y personas no organizadas.

La marcha recorrió las principales calles de San Salvador y finalizó con un mitin en los alrededores de la asamblea legislativa, y se caracterizó por la unidad de planteamientos por parte de las distintas organizaciones y por lo pacífico y ordenado de su desarrollo, hecho que causó buena impresión entre la ciudadanía. El sector comercial manifestó su confianza al mantener abiertos sus establecimientos. De esta forma la marcha de la unidad de los trabajadores se diferenció de las del pasado en cuanto a su forma, pero no en su fondo, el cual continúa siendo el mismo: la defensa de los intereses de las mayorías populares.

La respuesta del gobierno ante la creciente unidad de los trabajadores y su crítica masiva contra la gestión demócrata-cristiana no se ha hecho esperar. Mostrando una falta de sentido común y capacidad de análisis, el gobierno ha recurrido a maniobras características de regímenes anteriores, para los cuales toda protesta y toda reivindicación era considerada "desestabilizadora" y de signo "comunista."



El gobierno recurrió a una millonaria campaña publicitaria para justificar las medidas económicas y procurarse el apoyo de la población, y ha creado una serie de organizaciones paralelas ("fantasmas"), con el propósito de contrarrestar la "desestabilización de las extremas" y desvirtuar a aquellos que afirman que el gobierno no tienen ningún apoyo, así como para quebrar la unidad laboral. De hecho, estas organizaciones hacen suyas algunas de las necesidades más sentidas de los trabajadores. Además, diversas organizaciones gremiales y sindicales han denunciado que "el gobierno busca dividir el movimiento sindical, vía la destrucción de las juntas directivas de los sindicatos independientes, para nombrar en ellas a personas 'afectas' al gobierno."

Por otro lado, el gobierno, a través del ministerio de cultura y comunicaciones, ha montado una campaña de desinformación y desprestigio con el objeto de vincular al movimiento laboral con el FMLN, llegando incluso al extremo de afirmar que la propuesta presentada por la UNTS responde a una transmisión de Radio Venceremos del 17 de febrero. En realidad, la propuesta fue aprobada durante la asamblea del 8 de febrero.

Lo único que ha logrado el gobierno con todo lo anterior, es que el sector laboral consolide aún más su unificación, homogenizando aún más sus planteamientos, superando de esta manera sus diferencias ideológicas. En un pronun-

ciamiento hecho público el 26 de febrero, la UNTS denunció "la campaña de desprestigio y guerra psicológica contra los trabajadores," impulsada por el gobierno, y afirmó que Duarte, "en lugar de responder en forma inteligente y como un verdadero demócrata, está respondiendo con torpeza y en la forma que lo hacían las dictaduras del pasado." Asimismo, responsabilizó al gobierno y a la Fuerza Armada "por el desaparecimiento, la captura o asesinato de cualquier dirigente o miembro de base de la UNTS." El mismo día, la UNTS publicó una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas en la cual reiteró su preocupación por la actitud del gobierno y advirtió que "en El Salvador vincular a una organización o persona con el FMLN equivale a sentenciarla a muerte y esto es precisamente lo que de manera irresponsable está haciendo el gobierno del Ing. Duarte."

Ciertamente, la actitud del gobierno ante el movimiento laboral, no sólo refleja una mala lectura de la realidad, sino que muestra claramente sus márgenes de maniobra. Ante la incapacidad manifiesta de satisfacer las demandas más sentidas de las clases trabajadoras, so riesgo de generar contradicciones con Estados Unidos, el sector privado y la Fuerza Armada, el gobierno está recurriendo a la salida fácil de acusar de "desestabilizador" el movimiento laboral, generando de esta manera, el repudio y la unidad de la clase trabajadora y convirtiéndose así en el principal desestabilizador del sistema.

A.E.S.